

Nuevo León: “es mucho el miedo, pero es más hermosa la libertad”

Alicia Juárez

Hablar de Monterrey, Nuevo León, es señalar una pequeña muestra de lo que está ocurriendo en la zona norte del país. No es la mejor muestra, por más que diga la patronal regiomontana que si se pierde Monterrey se pierde México, expresión que manifiesta la soberbia de sentirse por encima de los demás mexicanos, clásico de la fracasada burguesía “regia”.

Además de la profunda crisis económica que estamos sufriendo todos los mexicanos pobres, se agrega el peso de una guerra que no es nuestra y en la que nos vimos enrolados sin pedirlo, guerra que nos hace sentir desorientados, sin entender hasta hace poco por qué estaba pasando.

El 16 de febrero de 2007, el ejército comenzó a tener una mayor presencia en Nuevo León con un operativo con 200 soldados efectuado en el municipio de Linares, en la zona citrícola; al día siguiente, Calderón anunció el envío de más de 2 mil 500 elementos a la entidad y a Tamaulipas para hacer “operaciones de alto impacto”, como les llaman desde entonces. Nueve días después, los soldados tomaron las avenidas y carreteras principales de Nuevo León e hicieron un operativo sorpresa por la madrugada en la colonia Independencia ubicada en la sierra (sur de la ciudad de Monterrey) y una de las más pobres del estado. Allí los soldados revisaron personas incluyendo mujeres que viajaban con sus hijos, a pie, en bicicletas, motocicletas y todo tipo de vehículos, con el pretexto de buscar armas y drogas.

Aplaudidos los operativos militares por la televisión local y los periódicos, y debido al aumento en los crímenes de y por el narcotráfico, algunos regiomontanos pensaban que era necesaria la presencia militar y que se ejerciera mano dura para terminar con la zozobra que se intensificaba día a día. Los retenes pasaron a ser Bases de Operaciones Mixtas (BOM) donde participaban soldados y policías estatales armados con armas de alto poder y perros amaestrados, incrementándose las revisiones de familias enteras que regresaban de los pocos lugares turísticos cercanos a Monterrey como la Presa de la Boca o la Huasteca.

Ante el fracaso de las BOM, pues eran contadas las armas o droga decomisadas, el gobierno decidió suspenderlos, para reiniciarlos al año siguiente (2009) reforzados con soldados, AFI, Policía Federal, Agencia Estatal de Investigaciones y Seguridad Pública del Estado, cuya presencia en las calles producía una mayor incertidumbre. Los retenes eran aleatorios y sorpresivos por toda el área metropolitana y algunos municipios de Nuevo León. Establecieron su centro de operaciones en el municipio de Juárez (a 20 kilómetros de Monterrey), hoy en manos del narcotráfico.

Con los retenes, los patrullajes y acciones en las colonias más pobres como el Cerro de la Campana, la Independencia, la Vicente Guerrero, La Risca y la Moderna se cometieron cateos ilegales, aprehensiones y asesinatos.

Las primeras protestas contra la presencia del ejército se presentaron el día 11 de febrero de 2009 con los llamados “tapacalles”, especialmente en

el norte de la ciudad de Monterrey. Sin ninguna evidencia, los medios difundieron que estas movilizaciones estaban pagadas por los narcos. En cualquier caso, la verdad es que estas protestas fueron aprovechadas por cientos de jóvenes hartos de las vejaciones de los soldados y policías, que se unieron a los bloqueos y llegaban a arrojar piedras a los policías; niños, adolescentes y mujeres que salían corriendo de las polvorientas calles y desvencijadas casas para sumarse a las protestas.

La iniciativa privada puso el grito en el cielo y los medios crearon pánico entre la población con la amenaza de que los narcos “podían tomar la ciudad”. Por su parte, las autoridades estatales y municipales se dieron a la tarea de crear un marco jurídico para criminalizar la protesta social: reformaron el Código Penal del Estado para tipificar como delito antisocial y calificar como dañina toda manifestación pública.

Mientras, se sucedían las noticias de enfrentamientos en diversos municipios de Nuevo León: General Bravo, Sabinas Hidalgo, General Treviño, Cerralvo, Vallecillos y aumentaba también el número de asesinados en el área metropolitana, convirtiéndose en una verdadera zona de guerra. A estas acciones se incorpora también la marina. Al terminar el año, se estimaba que había mil 500 soldados destacamentados en Nuevo León.

Para diciembre de 2010, la violencia ya era imparable. Desde que inició la presidencia de Calderón a esa fecha, la cifra de muertos (la reconocida por el gobierno federal) era de mil doce, que incluye los más de 50 cuerpos encontrados en una fosa clandestina en el municipio de Juárez en este año. Pero la información que se da abajo cuenta de muertes que no son reportadas, enfrentamientos especialmente de soldados contra supuestos narcotraficantes, patrullajes en la periferia del área metropolitana de Monterrey y masacres en municipios rurales de Nuevo León. Se habló mucho de las ocurridas en el municipio de Bustamante y Galeana comentadas por los propios vecinos de estos lugares.

De estas muertes y sólo del 2010, Human Rights Watch tiene

documentados los asesinatos de por lo menos ocho personas y la desaparición de diez, a manos de militares, marinos y policías. Entre ellos, los dos estudiantes de posgrado del Tecnológico de Monterrey, asesinados el 19 de marzo y a quienes el gobierno calificó de “sicarios”. Poco antes, en el mismo mes, pero el día 3, una pareja de trabajadores de maquila, ambos de 29 años, fue asesinada por el ejército en un supuesto enfrentamiento con narcos. Rocío y Juan Carlos, quienes acaban de salir de trabajar, se resguardaron detrás de un automóvil. Cuando terminó el enfrentamiento, con las manos en alto, Rocío les gritó a los militares rogándoles que ayudaran a su marido que estaba herido y manifestando que eran civiles y no estaban armados. Un soldado que se encontraba como a tres metros les disparó, después, un grupo de ellos se acercó hasta los cuerpos y les disparó nuevamente para rematarlos.

En el mes de septiembre, igual suerte corrieron Vicente de León Ramírez y su hijo de 15 años, cuando el vehículo en el que viajaban con su familia de regreso a su casa rebasó un convoy de soldados. Un capitán le disparó a las llantas, seguido por disparos de los demás que hirieron a dos niños, de ocho y nueve años, y a tres adultos. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) justificó el ataque diciendo que no se habían detenido en el retén militar —retén que nunca existió— y, finalmente, aceptaron que los soldados habían disparado “por inercia”.



¿Castigo? Por supuesto que no. De hecho, la realidad desmiente la bravuconada del gobernador Rodrigo Medina de que “en Nuevo León, el que la hace la paga”, pues, como en todo el país, la impunidad es lo que prevalece por encima de la justicia. Propios datos de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León dan cuenta de esta situación. En el 2010, se iniciaron 70 mil 598 averiguaciones previas, de éstas, sólo el 4.5 por ciento resultaron en consignaciones ante un juez y, de éstas últimas, a sólo el 2 por ciento se les dictó sentencia. Esta desconfianza hacia policías y ministerios públicos es la base para que la mayoría de los delitos (se calcula un 77.2 por ciento) ni siquiera se denuncien.

A pesar de esta situación, el secuestro el 16 de agosto del alcalde de Santiago, Edelmiro Cavazos, y la posterior aparición de su cadáver envuelto en una manta con el logotipo del PAN, sirvió de argumento para que la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra), el Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León (CCINLAC) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en un desplegado publicado a nivel nacional el 18 de agosto de 2010, le exigiera a Calderón que enviara de inmediato tres batallones más del ejército y uno de la marina, pues se necesitan “decisión y celeridad” para que vuelva la gobernabilidad al estado.

Para el mes de diciembre, Calderón responde favorablemente a la exigencia y anuncia la Operación Coordinada Noreste “para defender a comunidades más amenazadas por el crimen en Tamaulipas y Nuevo León” donde operarán ejército, marina, policía federal y fuerzas de seguridad estatales. Ordena “que se establezcan en esta región cuatro batallones adicionales”: unos 2 mil 400 efectivos, cuyos salarios y gastos serán pagados por el gobierno federal y estatal. Efectivos que se sumarían a los mil 800 enviados en abril del 2010 para la Región Militar que abarca Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

El estado y sus municipios recibirán en el 2011 cerca de 556 millones de pesos de la federación para

combatir el crimen y la inseguridad, 27 por ciento más que lo recibido el año anterior, así como 185 millones del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun) que se repartirán entre los nueve municipios metropolitanos (datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública). A éstos se sumarán 172 millones que tanto el estado como los municipios tendrán que aportar como contrapartida, adicionales a los 2 mil 400 millones de pesos que, según el presupuesto de egresos para 2011, contempla gastar el gobierno estatal en seguridad pública. La mayor parte de este dinero sería utilizado para la compra de patrullas y equipamiento como chalecos antibalas y armas con el fin de apuntalar principalmente el proyecto del Mando Único lo que le da al gobierno estatal el control de la mayoría de los recursos.

La tajada del pastel que les toca a los alcaldes metropolitanos a través del Subsemun causó disgusto entre algunos de ellos, como el de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández (PAN), que recibió diez millones y lo calificó como “una ridiculez”, pues él estaba negociando en la Ciudad de México 800 millones de pesos para blindar su municipio.

También, la alcaldesa del municipio de Guadalupe (PRI) que interpuso un recurso de inconformidad porque recibiría nueve millones menos que el año anterior en el que recibió 28 millones. El propio alcalde de Monterrey (PAN) dijo que no recibió ni un sólo peso el año anterior, y el del municipio de San Nicolás denunció que a él el gobernador Rodrigo Medina tampoco le entregó lo que le correspondía en este renglón, y pidió “reglas claras”, pues ellos invertían al año 250 millones de pesos.

¿Y para desarrollo social? El gobierno estatal dedicaría 934 millones “en el reforzamiento social y combate a la pobreza”.

Para el 24 de enero del presente año, ya estaban en operaciones los retenes y patrullajes del ejército y la marina junto con policías federales. Empezaron a instalarse entre doce y quince nuevos retenes que se sumaban a los 28 que ya se habían implementado



desde una semana anterior, previa reunión del gobernador Medina con los mandos militares de la Cuarta Región Militar donde se hizo oficial el acuerdo, según informó el vocero de Seguridad Pública estatal. Dichos retenes son permanentes y las 24 horas del día. Días después, el propio vocero anunciaba que más de 300 militares pasaban a ser policías estatales, usarían el uniforme de policías y patrullarían en las unidades de esta corporación, pero portando armas largas de uso exclusivo del ejército.

Por cierto, los policías municipales en Nuevo León tienen prohibido el uso de armas largas desde que el 10 de junio de 2009 estuvieron a punto de enfrentarse a balazos con policías estatales y federales. Los municipales de Escobedo, Guadalupe, Apodaca y San Nicolás protestaban con un bloqueo en el municipio de Escobedo, porque los policías federales se llevaron prisioneros a unos policías de ese municipio acusados de colaborar con los narcos. Se cortó cartucho y poco faltó para desatar la balacera en medio de cientos de automovilistas que estaban bloqueados y que acababan de salir de su trabajo, pues eran las 17:30 horas.

El alcalde que más ha insistido en la devolución de las armas largas a los policías municipales, “porque por eso no atrapan a los delincuentes”, ha sido Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro Garza García, prominente empresario de la industria química quien, desde el inicio de su gestión, se rodeó de un “grupo rudo” —al margen de las distintas policías—, que le proporcionaría información y estrategias para combatir al crimen en su municipio. La marina capturó a tres miembros de este grupo, por su relación con los narcos. Ante esto, el alcalde se limitó a decir: “¿y quiénes más me podrían dar información verídica?”. Uno de los capturados fue Francisco Domínguez, hijo del ex gobernador Martínez Domínguez y que ayudaba a financiar al tal “grupo rudo”. Además, han sido ejecutados tres de sus escoltas, entre ellos el encargado de recibir los datos que aportaban los integrantes de dicho grupo. Con la prepotencia que da el dinero, después del escándalo que provocó su grupo policíaco paralelo, Fernández dice que ha hablado de su plan de blindaje con el ejército y con agentes de Estados Unidos. Son frecuentes sus visitas al consulado gringo para solicitar apoyo.

Pero no sólo él. Desde abril de 2007, el Secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Natividad

González Parás (PRI), Aldo Fasci, se había acercado al consulado “pidiendo ayuda a Estados Unidos para evitar que Nuevo León caiga totalmente bajo el control de los cárteles”. Otros cuatro alcaldes salientes también se entrevistaron con el entonces cónsul gringo Bruce Williamson, para externarle sus temores. (Cables de Wikileaks sobre Nuevo León).

De la mano de la creciente militarización va el aumento de asesinatos, extorsiones, secuestros y abusos. Nada más en los dos primeros meses y los primeros ocho días del mes de marzo del 2011 se produjeron 241 ejecuciones. Se le preguntó al gobernador por qué si había más vigilancia militar, en lugar de bajar, subían los índices de asesinados. Él contestó: “si ustedes hacen la cuenta, también van a encontrar que muchas de estas personas que han perdido la vida están ligadas al crimen organizado y han sido acciones de autoridad” (Periódico *El Norte*, 21 de marzo de 2011). Pero los miliares no aprehenden, asesinan. La sola presunción de ser narco es motivo para que te disparen. Son frecuentes las noticias de seis, ocho muertos diarios, de los que no dan información de que estuvieran armados. Sabemos que esto no es nuevo, pero el ver cercano el asesinato de muchos jóvenes sólo por estar en las esquinas o cerca de una supuesta tienda distribuidora de droga o por andar tatuados o por su “aspecto de pandilleros”, como dicen los medios, indigna profundamente. Los militares no aprehenden, asesinan.

Y no sólo entre el gobierno estatal y el federal hay un común y perfecto acuerdo para militarizar el estado y el uso de millones de pesos para hacerlo, también los alcaldes toman sus propias decisiones de militarizar sus mandos, sus escoltas y sus policías, así sucede no sólo con el de San Pedro (PAN), sino con la alcaldesa de Escobedo (PRI), el de Monterrey (PAN), el de García (PRI), entre otros.

A principios de este año, el presidente del organismo empresarial Vertebra, Every Cuéllar, exclamaba: “Creo que estamos viviendo un vacío de poder, estamos frente a estructuras gubernamentales destrozadas y creo también que no existe, repito, confianza hacia una institución pública, creo que esto ya se perdió, hay un debilitamiento de todo el sistema gubernamental, es un hecho bochornoso... que la autoridad militar tome ya por su cuenta el asunto”. (Periódico *El Norte*, 20 de enero 2011).

Habría que preguntarles sobre esta exigencia, al secretario general de los sindicatos blancos (Federación Nacional de Sindicatos Independientes-FNSI) y a su tesorero, quienes fueron prácticamente secuestrados y encarcelados por los marinos que entraron a la sede sindical sin orden de cateo ni de aprehensión, y fueron “sustraídos, interrogados y golpeados sin justificación, sin fundamento legal, sin orden judicial, en flagrante atropello a sus más elementales derechos”. (Desplegado de la FNSI al presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, 7 de marzo de 2011).

En un reportaje sobre Monterrey del reportero Bill Neely, de la cadena gringa NBC, se dice que: “ha dejado de ser de las más prósperas y seguras de México... Monterrey se está hundiendo más rápido que cualquier lugar en México. Es una ciudad bajo sitio. El ejército, la policía, el gobierno, ninguno de ellos puede controlarlo. La corrupción es profunda, desde policías en las calles hasta jefes de policía, y más arriba, alcaldes, jueces, políticos de alto nivel”.

¿Será que se rompieron aquellos acuerdos que se hacían desde la presidencia durante el priato en el país? Sócrates Rizzo, ex gobernador de Nuevo León siendo presidente Salinas de Gortari, fue muy claro, y yo creo que muy sincero, en su conferencia “Federalismo y relaciones fiscales gubernamentales”, dada en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde indicó: “De alguna manera se tenía resuelto el problema del tránsito (de droga), pero había un control, y había un Estado fuerte y un presidente fuerte y había un control férreo del ejército. De alguna manera les decían: tú pasas por aquí, tú por aquí, tú por aquí, pero no me toques aquí estos lugares... Lo que cuentan ‘los viejos’... lo que controlaban los gobiernos priístas era que ese tráfico no perturbara la paz social” (Periódico *El Norte*, 24 de febrero de 2011). Claro, le faltó decir de cuánto eran *los moches*.

Lo cierto es que el vacío de poder es cada vez más impresionante; el gobierno de Rodrigo Medina está totalmente desgastado, si es que alguna vez, en su corto período, tuvo la confianza no digo de los ciudadanos, sino de los propios empresarios.

En medio de esta guerra, el ejército patrulla las calles apuntando con sus armas de alto poder, responde a supuestas denuncias ciudadanas sin

detenerse a obtener órdenes de cateo o arresto, siempre encapuchados, suprimiendo de hecho las garantías individuales sin que se haya decretado un estado de emergencia; con soldados vestidos de civil viajando en patrullas estatales o municipales o en los vehículos militares. Hay tiroteos a cualquier hora del día, en cualquier lugar: en tu barrio, tu casa, la calle, la plaza, la iglesia, el restaurante, en tu fiesta familiar, en la ciudad o en el campo... en ningún lugar la tienes segura.

El temor a ser asesinado, atacado, arrestado, extorsionado, secuestrado, robado, violado, hace que miles de familias huyan de sus lugares de origen. Prueba de esto es el desdoblamiento que han sufrido principalmente los municipios del noreste del estado, como Los Aldamas que perdió el 44 por ciento de su población; Melchor Ocampo el 29; Los Herreras, el 27 por ciento; General Treviño, el 25; Doctor Coss, el 24; Agualeguas, el 22; Cerralvo y Parás, 16 por ciento cada uno; Los Ramones, el 14 por ciento; y así le siguen China, General Bravo, Anáhuac, Villaldama, según datos del propio INEGI. Estos municipios que son algunos de los más pobres en el estado y que tradicionalmente su población es de migrantes que venían cada año de Estados Unidos durante las vacaciones a visitar a sus familiares, ya no lo hacen porque quienes transitan por las carreteras estatales son víctimas de asaltos, robos, retenes... pues el tal blindaje de carreteras con militares lo único que ha provocado es más angustia y temor de encontrarte con ellos en mitad de la nada.

Los que tienen algo de dinero migran a Estados Unidos, los que no, huyen hacia los municipios suburbanos del área metropolitana de Monterrey que, de nuevo según el INEGI, registraron un aumento poblacional del 800 por ciento. El caso más evidente fue en Zuazua, con un incremento del 814 por ciento: pasó de 6 mil 033 habitantes en el 2000 a 55 mil 172 en 2010; otro municipio en el que su población casi se quintuplicó fue García, al pasar de 28 mil 974 a 143 mil 670 habitantes, y Juárez, que pasó de 66 mil 497 a 256 mil 454. También, algunas colonias de Monterrey están siendo despobladas como la paupérrima Independencia, al sur de la ciudad, o La Cumbres, con vecinos de clase media al poniente de Monterrey.

La vida de todos los habitantes ha cambiado radicalmente. Las pláticas diarias son sobre cuántos asesinados, de qué manera, en dónde, por qué vía te puedes ir a tu casa al salir del trabajo o la escuela para evitar el bloqueo de soldados. Se acabaron los paseos dominicales con la familia a los pocos lugares turísticos que se encuentran a pocos minutos de Monterrey como la Cola de Caballo, la Presa de la Boca, la Huasteca, que ahora son patrullados por soldados, marinos, policías federales, estatales y demás, vestidos de distinta manera, pero a final de cuentas los mismos. La convivencia familiar está destrozada, ahora visitas a tus seres queridos cada tres meses si bien te va; desde las ocho o nueve de la noche las calles lucen solas... en los barrios jodidos ya no se oyen los gritos y risas de los niños jugando en sus calles, y l@s chav@s ya no pueden estar en las esquinas por el riesgo de ser rafagueados, menos hacer sus tocadas, reuniones en sus casas o fiestas en los salones... plazas de barrios o municipales y hasta la macroplaza están desoladas por el temor de ser alcanzados por alguna granada; los puesteros que se instalaban en las orillas de las plazas y a donde ibas y te echabas tus tacos, tus hamburguesas, tus hotdogs, han desaparecido por la violencia. Las clases de civismo de los niños y las niñas en las escuelas de preescolar, de primaria, de secundaria, se han convertido en ejercicios militares: principalmente la práctica de pecho a tierra. Tienen que estar listos con

sus celulares para avisar a mamá, a papá, a la hermana de que ya se interrumpieron las clases por las balaceras o bloqueos. Mientras, las universidades públicas y privadas contratan más personal de seguridad, cercan sus campus e instalan cámaras de video por todos lados. Hasta la vida religiosa cambió, por ejemplo, las peregrinaciones a la iglesia de Guadalupe tuvieron que iniciar a unas cuantas cuerdas de la iglesia y se prohibieron los cuetes y pólvora para no asustar a la población; algunos curas tuvieron que salir de sus iglesias para imponer la ceniza el miércoles de ceniza.

Un joven me comenta: “Hay un chingo de armas, mucho dinero, mucha droga y muchos jóvenes que se están involucrando... eso hace el ciclo de la violencia promovido por los de arriba”. El miedo se huele, la incertidumbre de ¿qué más va a pasar?, ¿a dónde vamos a llegar?

Pero todo tiene su límite. Como dijo un compañero: “es mucho el miedo, pero es más hermosa la libertad”. En cada individuo, en cada familia, en cada grupo por pequeño que sea, que resiste y construye calladamente y sin descanso otro mundo posible, porque los hay, que no se rinde y que no se vende, germina y se cultiva la semilla de la rebeldía. Cada día nos convencemos cada vez más que de arriba no se puede esperar nada, sólo dolor y lágrimas. Es en los de abajo, en los de más abajo que abajo, en esos indígenas zapatistas, en el pueblo digno y rebelde de nuestro país, en donde está la solución a este desastre. Ya lo veremos.

